

Revista chilena de historia social popular

REVUELTAS

SANTIAGO, CHILE | NÚCLEO DE HISTORIA SOCIAL POPULAR
AÑO 05 | NÚMERO 09 | JULIO 2024 | ISSN 2452-5707

ARTÍCULOS

¿Excepción o referente de masas? La lucha por la vivienda de la Agrupación de Allegados y Arrendatarios La Voz de los Sin Casa de la Toma de Peñalolén, Región Metropolitana de Chile (1997-2001).

Exception or Mass Referent? The Housing Struggle of Agrupación de Allegados y Arrendatarios La Voz de los Sin Casa from the Peñalolén Settlement, Metropolitan Region of Chile (1997-2001).

Santiago Castillo Braithwaite

Candidato a Doctor en Historia
Universidad de Santiago de Chile
Santiago de Chile, Chile

✉ info.shago@gmail.com

ORCID [0000-0003-0078-1073](https://orcid.org/0000-0003-0078-1073)

Recibido: 02 de abril de 2024

Aceptado: 18 de junio de 2024

Este artículo presenta algunos resultados de mi investigación doctoral “Las luchas por la vivienda en Chile (1997-2019): estrategias organizativas, formas de movilización y tradiciones políticas”.

Resumen: Se ha sostenido que durante los años noventa el movimiento de pobladores en Chile había desaparecido, sin embargo, la literatura ha desconsiderado un ciclo de protestas y ocupaciones de tierras cuyo punto cúlmine fue la toma de terrenos de Peñalolén de 1999. Este proceso se analizó en su contexto histórico como una respuesta popular a la recesión financiera y a la crisis del sistema habitacional. Se realizaron entrevistas a líderes comunitarios y una revisión crítica de prensa para narrar esta experiencia. Esta investigación revela la capacidad organizativa del movimiento y su importancia en la lucha por la vivienda.

Palabras clave: crisis de la vivienda, movimientos sociales, campamentos.

Abstract: It has been argued that during the 1990s, the pobladores' movement in Chile had vanished; however, the literature has overlooked a cycle of protests and land occupations culminating in the 1999 Peñalolén land takeover. This process was analyzed within its historical context as a popular response to the financial recession and housing system crisis. Interviews with community leaders and critical press review were conducted to narrate this experience. This research reveals the organizational capacity of the movement and its significance in the housing struggle.

Keywords: housing crisis, social movements, slum.

Introducción

Existe una importante cantidad de estudios que han propuesto que el movimiento de pobladores y pobladoras de Chile experimentó un proceso de reflujo e incluso de desaparición en los noventa tras una década intensa de activismo poblacional (Espinoza, 1993; Rodríguez y Sugranyes, 2004; Garcés, 2011; Iglesias, 2011; Özle, 2012). Dos grandes tomas de tierras que se realizaron en este período han sido observadas como casos excepcionales y aislados (De La Maza, 1999, Castillo y Forray, 2014, Angelcos y Pérez, 2017). Incluso la ocupación en que participaron 2 mil familias en 1999 en los terrenos del empresario Miguel Nasur, en el sector oriente de Santiago, fue situada como la “última toma” (Salcedo, 2010).

Estas hipótesis carecen de evidencia empírica. Han impedido observar adecuadamente las estrategias de organización y las formas de lucha de las familias pobladoras durante los dos primeros gobiernos de transición a la democracia, y especialmente, han descuidado el ciclo de movilización de *los sin casa* de fines de los noventa, en el que se formaron grandes asentamientos populares como La Pampa (1999) en Alto Hospicio, Parcela 11 (1997) y Manuel Bustos (2000) en Viña del Mar, Carlos Oviedo (1998) en el sector de Bajos de Mena en la Región Metropolitana (Un Techo para Chile, 2004, Braithwaite, 2020) y decenas de comités de allegados desarrollaron intensas movilizaciones que utilizaron la ocupación de edificios gubernamentales, marchas, cortes de calle, tomas de viviendas en construcción y de terrenos para presionar a los gobiernos por obtener soluciones (Giannotti y Braithwaite, 2021).

Este artículo propone analizar este período a partir de la historia de una de las ocupaciones de tierras más grandes de la década: la Toma de Peñalolén (1999). Nuestra perspectiva buscó subrayar que este evento se trató del punto más ascendente de un ciclo de conflictos sociales asociados a la vivienda durante estos años y expresó la continuidad histórica de ciertas prácticas del movimiento poblacional, por lo que consideramos que no es un evento “aislado”, sino que el resultado de un proceso histórico. Utilizando una estrategia teórico-metodológica que parte de la premisa de que las ocupaciones de tierras pueden ser estudiadas desde su dimensión contenciosa como *eventos de protesta social y acción colectiva* (Giannotti y Cofré, 2023; Giannotti y Braithwaite, 2021; Garcés, 2015; Cofré, 2011, Garcés, 2003) y destacando el efecto de las condiciones estructurales del neoliberalismo en este período a la luz de la teoría de la acumulación por desposesión desarrollada por Harvey (2004), pudimos constatar que la Toma de Peñalolén fue una expresión de conflictividad social en el marco del acoplamiento de los efectos en los sectores populares de la recesión económica internacional con la crisis interna del sistema habitacional chileno a fines de los noventa.

Relevar esta experiencia puede ser significativo en el marco del auge de los estudios sobre los nuevos campamentos que se han conformado en Chile desde 2010 (Pérez y Araos, 2024; Zenteno y et. al. 2023; Zenteno y et. al, 2020; Imilan y et. al, 2020, López-Morales y et. al, 2018) y respecto al nuevo movimiento de pobladores (Angelcos y Pérez, 2023; Angelcos y Pérez, 2017) para demostrar la persistencia de las luchas por la vivienda durante los últimos treinta años y sus efectos performativos en las políticas habitacionales y en el desarrollo de los movimientos sociales en general.

Hemos realizado una serie de entrevistas en profundidad, utilizando un método biográfico narrativo a dirigentes y dirigentas del campamento durante el período, complementadas con la revisión de la prensa de la época, para ofrecer una narrativa sobre la historia de la experiencia la Agrupación de Allegados y Arrendatarios La Voz de Los Sin Casa de la toma de terrenos de Peñalolén.

A partir de este relato, este trabajo demostró las capacidades organizativas del movimiento durante el período, así como el desarrollo de estrategias organizativas complejas. Nuestra hipótesis es que esta ocupación de tierras expresó el punto más agudo de un ciclo de movilizaciones de los pobladores sin casa a nivel nacional: lejos de haber sido un caso aislado, y en ese sentido, excepcional, en realidad, expresó una acumulación de experiencias históricas acoplada a una creciente crisis social, convirtiendo a la Toma de Peñalolén en uno de los principales referentes de la lucha por la vivienda tras el fin de la dictadura militar.

La respuesta popular a la crisis de fines de los años noventa

La crisis económica internacional dominó los confines del siglo XX. Desde la dimisión del primer ministro de Tailandia en julio de 1997 hasta la espectacular huida en helicóptero de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 en Buenos Aires, la primera caída financiera de la llamada era globalizada recorrió el mundo como un fantasma y Chile no estuvo exento de sus penas. En 1998, el país tuvo su tasa de crecimiento más baja desde 1990 y en 1999 la cesantía alcanzó en el país un 11,4%, la más alta desde el retorno a la democracia (Cavallo, 2022, pp. 40-41).

En paralelo, las lluvias del invierno de 1997 habían develado la crisis de la vivienda del país (*La Tercera*, 27 de julio de 1997, p. 4). Tras el primer temporal del período, más de 20 mil viviendas de varios conjuntos habitacionales recién entregados resultaron dañados por las lluvias (Bravo, 2019). Fue el inicio de un debate sobre los brutales problemas de calidad y de segregación urbana del masivo parque de nuevas viviendas sociales construido en el período (Ducci, 1997; Rodríguez y Sugranyes, 2004). Este caso se convirtió en uno de los principales

conflictos del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando se comprobó que dicha empresa había regalado un caballo pura sangre al, entonces ministro de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Eduardo Hermosilla.

La combinación de ambas dinámicas causó un escenario contra cíclico sobre el problema de la vivienda en el país que, a nuestro juicio, manifiesta su proceso de reconfiguración. Si bien durante la década del noventa, disminuyó el número de hogares allegados, la encuesta CASEN de 1996 cifró en cerca de 746 mil las familias en esta condición, número que aumentó a 758 mil para 1998 y volvió a descender levemente hacia el 2000 (Ministerio de Desarrollo y Planificación, 2000).

Con ello queremos resaltar dos afirmaciones: en el marco de la crisis financiera, las posibilidades de acceder a una vivienda disminuyeron tanto por la precarización económica de las familias de menores ingresos, dificultando en algunos casos la posibilidad de ahorro, en otros, del pago del dividendo. En el 2000, algunos parlamentarios alertaron que cerca de 200 mil beneficiados con viviendas sociales estaban atrasados en sus pagos (*Las Últimas Noticias*, 7 de mayo de 2000).

Por otra parte, el universo total de familias allegadas seguía siendo alto en el país. La literatura sobre movimientos sociales ha desconocido el efecto que tuvo esta crisis en la economía de los sectores populares, con un consiguiente aumento de la conflictividad social y particularmente su relación con el auge de las movilizaciones de los pobladores sin casa y deudores habitacionales (Braithwaite, 2020).

Entre 1998 y 1999, se realizaron 13 intentos de tomas de terrenos o de viviendas en construcción en la Región Metropolitana (Giannotti y Braithwaite, 2021), algunos de ellos terminaron en significativos disturbios como la toma de la Villa José Donoso en El Bosque y en el intento de toma de la Coordinadora La Voz por una Vivienda Digna en Macul en diciembre del 1999, fue golpeada una líder comunitaria estando embarazada (entrevista a Zarelli Fonseca, julio de 2023).

Origen de un campamento histórico

El día lunes 14 de junio de 1999, cerca de 600 familias de los comités de La Voz realizaron una marcha e instalaron lienzos, pancartas y unas pequeñísimas casas de cartón en un sitio eriazo en Peñalolén. La Agrupación instaló estas casitas en el terreno particular del empresario Nasur y demandaron soluciones habitacionales.

Después de unas horas, la movilización se trasladó al Municipio de Peñalolén, en donde los pobladores tomaron sus dependencias y consiguieron ser recibidos por el alcalde de la comuna, quien se comprometió a realizar un aporte económico para el ahorro de estas familias (*La Cuarta*, 15 de junio de 1999, p. 4).

La Voz había resultado de la confluencia de varias fuerzas en 1998. En 1997, uno de sus principales dirigentes, Alexis Parada había formado tres comités de vivienda. Mientras, un nuevo movimiento político de raigambre de izquierda revolucionaria, conocido como Surda, tomaba iniciativas para insertarse en el ámbito poblacional. Ese año también, los hermanos Zarelli y Miguel Fonseca, Sandra Olivos y German Nahuelhual, entre otros militantes y dirigentes, formaron la Coordinadora de Allegados y Arrendatarios de Macul (revista *La Surda*, junio-julio de 1998, pp. 6-10).

Al poco andar, convergieron ambos proyectos: Parada, que había militado anteriormente en el Partido Comunista, simpatizó con el proyecto de la Surda y se trasladó a apoyar el proceso de lucha de la Coordinadora, Nahuelhual junto con Marcelo Reyes, también integrante de este movimiento y futuro líder de la Agrupación, hicieron lo mismo en Peñalolén.

Aquí cabe decir que esta comuna una larga historia de ocupaciones de tierras que se remota, al menos, a la década de 1960 (Bravo, González y Caro, 2022). Durante la dictadura, sus pobladores habían intentado tomas frustradas por la policía. Apenas terminó el régimen militar, en este territorio se realizaron dos ocupaciones de terrenos exitosas entre 1991 y 1992: La Coordinadora y Esperanza Andina (Moyano y Braithwaite, 2023). Las familias pobladoras tenían experiencias en torno a las ollas comunes, en barricadas y en tomar terrenos.

La población Lo Hermida había sido el epicentro de la gestación de las protestas contra la dictadura en esta comuna, así como en las ocupaciones en los primeros años de la transición a la democracia. También fue el centro de gravedad de La Voz en sus primeros meses, que comenzó su trabajo en una zona que contaba no sólo con altos índices de pobreza y allegamiento, sino que, con una tradición sobre la lucha por la vivienda, de modo que sus dirigentes se sembraron en tierra fértil para la acción colectiva (Iglesias, 2023).

En los siguientes meses, la Agrupación tiene un sostenido proceso de crecimiento. Hacia marzo de 1999 ya contaba con siete cuadrantes en diferentes poblaciones de Peñalolén. Cada uno debía elegir sus propios delegados. En Lo Hermida tenían tres, lo que indicaba un notorio aumento en las expectativas de los pobladores.

El grupo de dirigentes también resolvió tener una conversación con José Luis Flores y Olga Leiva, los principales dirigentes de Esperanza Andina. Flores había vivido y militado en el campamento Nueva Habana durante la Unidad Popular, emblemática experiencia del frente poblacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y participó en las tomas de los campamentos Cardenal Silva Henríquez y Cardenal Juan Francisco Fresno en plena dictadura. También fue el líder de la formación de la Coordinadora Intercomunal de Allegados en 1990 y de las mencionadas ocupaciones La Coordinadora y Esperanza Andina (Flores, 1992).

En las entrevistas que realicé a Marcelo Reyes y Alexis Parada, coincidieron en destacar, que, de esta reunión, sacaron una lección: que se debía indicar desde el principio a la gente que el comité realizaría protestas y manifestaciones. La experiencia de Esperanza Andina irradió todo el proceso que se estaba gestando, no sólo a través de sus dirigentes, si no que principalmente a través de las familias pobladoras que pudieron tener un amigo, familiar o conocido dentro de este campamento con quienes pudieron intercambiar experiencias.

De modo que, hacía marzo de 1999, según esta versión, La Voz contaba con una estrategia para acceder a la vivienda basada en la movilización social y planificaban realizar una toma de terrenos después del invierno. Además, en cada asamblea que realizaba, se sumaban más familias. Por ello su directiva decidió realizar una ocupación simbólica del sitio: había que marcarlo, como primer paso.

La toma simbólica despertó una suerte de movimiento de masas más grande que La Voz. Si bien desde hace años un grupo reducido de familias ya se había instalado en el terreno con la autorización del propietario, a partir del 22 de junio otras familias habrían roto los candados y habían comenzado a apostarse lentamente en el terreno (*La Segunda*, 9 de julio de 1999, p. 6).

El domingo 4 de julio La Voz convocó a una asamblea general de la Agrupación en la Villa Grimaldi, ex centro de detención recuperado en 1994 por diferentes organizaciones sociales, colindante con los terrenos de Nasur. Sus principales líderes instaron a todos los dirigentes, delegados y delegadas de la organización a declararse en estado de alerta.

Sin embargo, según reconocen ambos dirigentes, al finalizar la reunión se les acercaron varios pobladores para decirles que más familias que estaban ingresando al predio. No sabía si pertenecían a La Voz. A las pocas horas, ya entrada la noche, algunos delegados de los cuadrantes van a buscar a los principales líderes del movimiento para informarles que la toma de terrenos masiva ya había co-

menzado. Ahora sí, no dudaron: ordenaron a todos los delegados y delegadas en reunir a todos sus vecinos y dirigirse al terreno.

Marcelo recordó que la gente presionó por ingresar al terreno y obligaron una rápida votación para realizar la toma. En minutos, comenzó una silenciosa caminata desde la entrada del sitio hacia las canchas que estaban ubicadas en su centro y hasta ocupar sus confines, con una larga de cola de carretones e incluso camiones.

Entre la noche de ese día y la madrugada del lunes cinco de julio se realizó la Toma de Peñalolén: en menos de cuatro días, 2000 familias se instalaron en las veinticuatro hectáreas del terreno, construyendo un mito sobre esta ocupación que perdura hasta hoy en la memoria social de las y los peñalolinos. Fue la ocupación de tierras más grande desde la formación de los campamentos Silva Henríquez y Fresno en 1983 en la historia reciente de Chile (*La Tercera*, 10 de julio de 1999, p. 15).

Estrategia organizativa de La Voz de Los Sin Casa

Según todas las entrevistas que realizamos, en el amanecer del 5 de julio, el objetivo fundamental de las familias era quedarse en el sitio ocupado y sobrevivir en el intento. Junto con La Voz de Los Sin Casa, se asentaron en el terreno los comités Los Niños, Luz y Esperanza, Nueva Palena, Las Canchas y Nuevos Tiempos (entrevista a María Elena Morales, agosto de 2022).

En la mañana de ese día, se organizaron las primeras ollas comunes del campamento, institución fundamental para apalear el hambre y el frío, mientras que, en paralelo, los dirigentes y dirigentas de los diferentes comités de vivienda se dieron a la tarea de terminar de lotear el terreno. Según la versión de Reyes y Parada, a las 16 horas de ese día, el predio estaba completamente copado.

Desde el principio, la Agrupación intentó replicar y fortalecer el modelo de organización que había venido utilizando. Ese mismo día en la tarde se realizó la primera reunión de este grupo en la toma: procedieron a la formación de cuadrantes, rectificaron a los delegados y la directiva asumió la conducción, pero, sobre todo, se instaló una asamblea como mecanismo de comunicación y de toma de decisiones.

Cada cuadrante debió tener reuniones prácticamente de forma diaria a comienzos de la ocupación, y posteriormente, de forma semanal y así como mantener un delegado principal, un subdelegado y encargados de comisiones. En las primeras semanas lograron establecer 12 cuadrantes, pero durante los siguientes

meses, algunos se dividieron para reorganizarse y también creció el campamento, como veremos. Llegaron a ser 24 cuadrantes en diciembre de 1999 (revista *La Surda*, noviembre-diciembre de 1999, pp. 20-26).

Cada representante de cuadrante integró un Consejo de Delegados, órgano dependiente de la Directiva Central, responsable de la conducción diaria del movimiento bajo el mandato de las decisiones que tomaba el Consejo. Este modelo orgánico pretendía, entonces, que la directiva propusiera tablas o puntos de discusión, para que se debatieran en las asambleas de cada cuadrante y de esa forma las bases generaran mandatos. *Mandar obedeciendo*, al estilo zapatista.

Previamente a la ocupación, La Voz ya había formado un equipo de Seguridad, que recibió apoyo directo de algunos militantes de la Surda para su preparación y que cumplió, como hemos descrito, prolijamente la tarea de ocupar y defender el terreno de un posible desalojo y de normar la convivencia interna (entrevista a Alexis Parada, agosto de 2022).

También, desde sus andanzas por Macul y por Lo Hermida con German Nahuelhual, Alexis Parada había conseguido equipos para generar una transmisión radial clandestina en frecuencia FM, por lo que constantemente los estaban moviendo de un lugar al otro. Realizada la toma, la radio encontró su sitio en una pequeña pieza provisoria y su nombre: *La Voz 98.9*.

La radio se transformó en uno de los emblemas del campamento y en su medio de comunicación interno oficial, por lo que realizaban tanto programas de entretenimiento como generaban contenidos informativos.

Tras la toma la Comisión Seguridad, se dio a la tarea de copar el terreno, cerrar el terreno, generar rondas de vigilancia en que debían colaborar todas las familias y establecer una vía de acceso principal. También se formó la Comisión de Construcción, encargada de colaborar con las familias en el levantamiento de sus precarias viviendas, y la Comisión de Ollas Comunes. Cada una podía cocinar para 60 hasta 100 familias, por lo que su aporte fue fundamental en la supervivencia de la toma (entrevista a María Elena Morales, agosto de 2022).

La directiva de La Voz zanjó aplicar un reglamento interno conocido como *Las Leyes del Campamento*. Este era parte de un Plan de Seguridad que la comisión con el mismo nombre se encargó de aplicar. En la ocupación fue prohibido el ingreso y consumo de drogas y se estableció la *ley seca*, se decretaron horarios de entrada y de salida, así como horarios de visitas, todas las personas debían reconocer a sus delegados y organizar sus compras de productos básicos a través de ellos, e incluso se impidió la salida de los hombres mientras durará el estado de alerta de un posible desalojo (*La Nación*, 10 de julio de 1999, p. 3).

Aunque no aparece registrado en la prensa, algunos dirigentes recordaron que también estuvo prohibido *el gateo* entre las carpas, es decir, la infidelidad, más por evitar conflictos que por moralidad. También fueron sancionadas la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil (entrevista a Germán Henríquez, agosto de 2022). Fue la propia Comisión la encargada de castigar la infracción a estas normas y se aplicaron en numerosos casos con dureza, según los testimonios que recogimos.

¡No nos moverán, hasta alcanzar el sueño de nuestra casa propia! De esta forma inició Marcelo Reyes una interrumpida conferencia de prensa por los rumores de un posible desalojo al tercer día de la toma (*La Nación*, 10 de julio de 1999, p. 3). Esta consigna resumió el objetivo común a corto plazo de las familias pobladoras. Básicamente era reemplazar las viviendas de cartón, zinc y nylon que utilizaron los primeros días como carpas por construcciones un poco más sólidas. Bajo la dirección de la comisión de Construcción, al quinto día, gran parte del campamento se había colgado a la luz (*La Hora*, 9 de julio de 1999, p. 9).

Día que pasaba, era un día que ganaban, según recordó Reyes: en medida de que la toma estaba más consolidada, y más organizada, se reducían las posibilidades de un desalojo que no terminase en un enfrentamiento que podría haber tenido un alto costo político para el gobierno.

En las primeras semanas de la toma, el Estado delimitó su posición. El intendente regional, Eduardo Velasco, presentó una querrela por loteo irregular. La tesis del gobierno consistía en que Miguel Nasur habría autorizado el ingreso de las familias y la consolidación de sus viviendas en el terreno, lo que constituía un delito. A esta hipótesis adhirió el diputado Jocelyn Holt, el Ministro de Vivienda y el Ministro del Interior (*La Nación*, 9 de julio de 1999, p. 2; *La Tercera*, 10 de julio de 1999, p. 15; *La Hora*, 13 de julio de 1999, pp. 4-5; *La Segunda*, 8 de julio de 1999, p. 2).

El gobierno no debía intervenir, según las autoridades, otra forma de proceder podría incentivar las ocupaciones ilegales, lo que el gobierno no estaba dispuesto a permitir. Así lo demostró cuando el 11 de julio, cerca de 60 familias de la población Los Navíos de La Florida, inspiradas en lo que ocurrió en Peñalolén, según declaró su dirigente Hugo Herrera, intentaron tomar un sitio baldío, siendo rápidamente desalojadas por la fuerza de Carabineros (*La Hora*, 12 de julio de 1999, p. 5).

El día que comenzó con el intento de toma en Los Navíos devino en una torrencial lluvia, que obligó a los dirigentes a evacuar a los niños y niñas del cam-

pamento a una junta de vecinos cercana. La pobladora Rosa Henríquez, quien vivía con sus cinco hijos en la toma, detalló a *La Nación* que:

“Cuando empezó el viento y la lluvia sentí que el techo de mi carpa voló y nos empezamos a mojar. Las colchonetas se empaparon al tiro. En ese momento tuvimos que salir a la intemperie, fue una noche terrible porque pasamos mucho frío” (*La Nación*, 12 de julio de 1999, p. 20).

La Municipalidad de Peñalolén -que, por cierto, se habían mantenido en silencio- envió frazadas, víveres y un camión aljibe para distribuir agua al campamento, y la Intendencia Metropolitana mandó abrigo y cerca de 250 colchonetas, sin dejar de advertir que “en ningún caso pretenden validar la posición de los pobladores de recurrir a una ocupación irregular para obtener viviendas” (*La Tercera*, 12 de julio de 1999, p. 12). Numerosas organizaciones y particulares se hicieron presentes para apoyar a los pobladores (*El Metropolitano*, 12 de julio de 1999, p. 9).

La urgencia que provocó la lluvia pareció opacar la emergencia de un inminente desalojo, lo que, sin duda, fue aprovechado por las familias del campamento para asentar sus viviendas y continuar sus movilizaciones. El 16 de julio, 600 afiliados a La Voz marcharon por el centro de Santiago para ir a dejarle una carta al Presidente en que declaraban que no abandonarían el sitio que habían ocupado (*El Mercurio*, 17 de julio de 1999, p. 7C).

La semana siguiente se reunió de emergencia la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para realizar una sesión especial sobre este problema (*La Tercera*, 15 de julio de 1999, p. 14). Sólo dos días después Carabineros reprimió nuevos intentos de tomas de terrenos en tres comunas de la Región Metropolitana: Renca, Curacaví y Peñaflor (*El Mercurio*, 21 de julio de 1999, p. 5C).

Al mes de la toma, se realizó un encuentro en el campamento con diferentes organizaciones y visitas, terminando en una fiesta en la que, según recordó el dirigente José Rojas, se empezaron a prender los cables conductores de la electricidad. En ese momento, no existía mayor control sobre estas instalaciones que un cable de alimentación central colgado de la red pública, del cual las familias, como podían, a su vez, se arrimaban.

Entonces, fue el propio José Rojas, quién se acercó a los dirigentes de la toma, y les advirtió sobre estos riesgos. Les propuso hacer un llamado a La Voz para formar un equipo de eléctricos. Esa misma tarde en la asamblea se formó la Comisión de Electricistas (entrevista a José Rojas, septiembre de 2022).

A través del aporte económico de las familias y el reciclaje de pequeños retazos de alambres, comenzaron a generar una red básica mucho más segura en

el interior de la toma. Ahora el principal problema era que la empresa privada Chilectra les cortaba continuamente el suministro eléctrico.

Rojas señaló que varias veces los pobladores intentaron parlamentar con los funcionarios hasta que un día, cerca del primer aniversario de la toma, se tomaron una camioneta de Chilectra y la retuvieron, lo que motivó un diálogo de la empresa con los dirigentes de la toma.

El día después, Chilectra denunció públicamente que producto de los colgados de la luz se habían quemado 15 transformadores y que la empresa había tenido que invertir 50 millones de pesos en su reparación, y el alcalde de Peñalolén solicitó una mesa de negociación (*La Segunda*, 7 de junio de 2000, p. 36). Fue el propio Rojas quien encabezó la negociación. A la postre, por ingenio y por cansancio, en determinado momento la empresa decidió hacer vista gorda frente a esta situación.

El viernes 15 de octubre, cerca de cuatro meses después del inicio de la toma, la agrupación decidió recurrir a una vieja técnica: *la corrida de cercos* (*La Tercera*, 17 de octubre de 1999, p. 21). Silenciosamente, ampliaron la toma y reordenaron a 74 familias que estaban en una situación de hacinamiento dentro del campamento: así se constituyó el cuadrante 17 de *La Voz*.

Este cuadrante albergó la leyenda de la conexión ilegal al alcantarillado. La versión de Parada cuenta que asumió esta tarea y lo primero que hizo fue buscar al Viejo Lucho, un poblador con gran experiencia en construcción, quien planificó la conexión a la red. Después de un chequeo general, empezó el trabajo. El obrero se convirtió en jefe de obras.

Los pobladores organizaron secretamente un grupo de 100 vecinos. El Viejo Lucho prohibió el ingreso de mujeres, lo que causó molestia, por lo que este habría tenido que explicar que en el arenero nunca habían trabajado mujeres y que su presencia llamaría la atención de algún intruso. Había que evitar sospechas.

Formaron una rampla, empezaron a formar la zanja, le colocaron un techo para camuflarse, ventiladores en base a botellas desechables y una instalación eléctrica provisional. Parada cuenta que, de apoco, la gente empezó a enterarse de las obras y a crecer la ansiedad en el cuadrante 17. Al séptimo día de trabajo, en medio de la noche, lograron pinchar en la red de alcantarillado.

Para conectarse, colocaron un tubo hacia el campamento, lo sellaron y comenzó la tarea del cierre de toda la excavación. Alexis señala que, aunque era de noche, se corrió inmediatamente el rumor y llegaron de 50 a 60 mujeres con tarros, que se unieron épicamente a los pobladores a tirar la tierra para tapar el

barranco. La tarea estaba cumplida. Al otro día, instalaron las primeras conexiones de alcantarillado.

Por último, quedaba informar al resto de los dirigentes de La Voz. En reunión, mostraron un video que registraba todo el proceso de la conexión. Lo que en ese momento necesitaban eran los tubos que permitieran acercar la conexión a cada domicilio, por lo que organizaron una movilización al Municipio de Peñalolén para pedir las cañerías. *Al otro día hubo una fiesta con los tubos en el campamento*, en palabras de Alexis (entrevista a Alexis Parada, agosto de 2022).

Por otra parte, La Voz le dio gran importancia a la educación de sus afiliados. Por este motivo crearon la Comisión de Cultura y Educación. Elizabeth Cerna, quien participó de esta comisión, enfatizó el éxito con que se desarrolló el proyecto para construir una escuela nocturna de recuperación y nivelación de estudios para adultos y preuniversitario, considerando que una parte significativa del campamento no había cursado sus estudios básicos o medios.

Las pobladoras que lideraron este proyecto fueron capacitadas como monitores de alfabetización y apoyadas por estudiantes de varias universidades. Este espacio fue llamado Escuela Popular La Voz Construyendo Futuro y benefició a decenas de vecinos de la toma (entrevista a Elizabeth Cerna, agosto de 2022).

Un asunto central en el trabajo de la Agrupación fueron los niños y las niñas, quienes componían una parte importante del campamento. Según algunos dirigentes, habrían más de tres mil niños en la toma (revista *Punto Final*, agosto de 1999, p. 32). Una de las principales impulsoras de este trabajo fue Darinka Morales. El proyecto de la Comisión de Niños avanzó con el tiempo a consolidarse en el Jardín Infantil El Canelo de La Voz de Los Sin Casa y algunas tías se capacitaron como monitoras de párvulo.

Darinka fue una de las educadoras que se quedó hasta la erradicación definitiva del campamento. Ella recordó que fue la decisión de La Voz de establecer la prohibición de la violencia en contra de los niños dentro del campamento lo que llevó a tomar medidas para hacerse cargos de esta problemática e integrar a los niños dentro del proyecto (entrevista a Darinka Morales, noviembre de 2022).

Con el paso del tiempo establecieron una suerte de alianza con algunas profesoras de la Universidad Católica, con quienes tuvieron una estrecha relación, mientras avanzaron a consolidar tanto la toma como el Jardín. Luego, generaron una actividad de recaudación de fondos que les permitió gestionar un sitio del campamento para instalar definitivamente allí el espacio comunitario.

Una vez conseguido el lugar, lograron el apoyo oficial de Junta Nacional de Jardines Infantiles, lo que permitió garantizar leches, desayunos y almuerzos de forma permanente para los niños. Además, el Hogar de Cristo comenzó a realizar una pequeña paga a las monitoras de párvulo. Darinka destacó que, para los arreglos del jardín, ellas mismas gestionaron con una constructora un aporte de una carga de cemento de un camión y organizaron a los papás y mamás de los niños, quienes con pala y carretilla descargaron la mezcla.

Además de las comisiones que hemos mencionado, cada cuadrante debió tener un encargado de aseo y ornato dentro de su territorio. Parada recordó con un profundo sentido de orgullo que la zona de La Voz en el campamento estaba siempre limpia, tenía basureros y que las personas que la visitaban destacaban *que no tenía un papel en el suelo* (entrevista a Alexis Parada, agosto de 2022).

Contención estatal y división del campamento

La estrategia de La Voz en los primeros meses de la ocupación fue básicamente instalar y consolidar, tanto material como organizativamente, el campamento bajo la consigna de construir *una población de nuevo tipo*. En la primavera de 1999 comenzó oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales, lo que ayudó distender la presión del gobierno sobre el campamento. La situación política brindó una oportunidad para la consolidación de la toma.

Este período fue especialmente fructífero para el crecimiento de la fuerza propia de la organización, principal apuesta política de la Surda en la toma. Esta organización tradujo rápidamente la experiencia de la toma en el diseño de una tesis política sobre el trabajo poblacional basado en “acciones referenciales de masas, es decir, mostrando como una experiencia de lucha y organización social, podría avanzar en el camino para lograr mayor justicia social” y transformarse en un ejemplo para sus pares (entrevista a Tania Madriaga, noviembre de 2022).

En palabras de Marcelo Reyes, vocero de La Voz y militante surdo, la autonomía política en la toma significaba:

“Significa que al construarnos como organización también vamos construyendo nuestro propio camino político. Esto nos ha llevado a comprender que somos un actor y no un espectador de la lucha política de este país. Porque mientras permanecíamos mudos y esperando se nos utilizó, y ahora que despertamos todos han venido a ofrecernos sus fórmulas mágicas” (revista *La Surda*, septiembre-octubre de 1999, pp. 15-16).

Sin embargo, la estrategia de La Voz empezó a mostrar límites luego de haber asegurado las viviendas. El desafío principal, después, sería la urbanización del campamento y la regularización legal de los sitios.

La Voz convocó a un congreso interno que se desarrolló en noviembre de 1999 para discutir este problema en donde se zanjó un plan de lucha que, al menos Parada, recordó como el Plan de la Niña Bonita: el objetivo era quedarse *con la tierra más bonita, aquella que todos querían*. Es decir, la radicación definitiva en el terreno (entrevista a Alexis Parada, agosto de 2022).

La idea era conseguir que Miguel Nasur vendiera *el terreno a precio de pobre*, directamente a las familias. Para ello, planificaron una serie de movilizaciones y establecieron un mandato interno de fortalecimiento de las capacidades propias de los pobladores a través de la autoconstrucción.

En las palabras de Parada, si bien en un inicio La Voz propuso la expropiación del terreno, este plan sacó del centro al Estado y se enfrascó en una lucha frontal y directa contra el propietario, lo que, según este dirigente, fue el error más importante de la Agrupación.

También es importante destacar que los comités que no pertenecieron a La Voz, comenzaron a formar un espacio de coordinación interna conocido como El Colectivo. Uno de sus dirigentes, Mario Muñoz, dio su primera entrevista en diciembre de 1999 presentándose como secretario general del campamento. Muñoz, cercano a la Izquierda Cristiana, en los siguientes años se convirtió en el líder y vocero de la Federación Campamento Peñalolén, organización que fue reconocida como interlocutora oficial del gobierno un tiempo después.

La historia del campamento tiene versiones encontradas. Hemos pretendido rescatar específicamente la visión de La Voz, pero, debemos puntualizar que la posición que entregó Muñoz -y sus seguidores- actualmente difiere de esta. Recientemente, el tesista Cristián Muñoz Roa ha publicado una investigación desde esta perspectiva, en que se destacó la trayectoria de Mario Muñoz (Muñoz Roa, 2021).

Es interesante contrastar que en el relato historiográfico propuesto por Muñoz Roa se definió La Voz era un frente intermedio de la Surda y enumeró una serie de diferencias ideológicas entre la Federación y La Voz. Mario Muñoz es presentado como un dirigente que fue capaz de superar a La Voz y buscar una salida moderada (Muñoz Roa, 2021, pp. 55-57). Esta es la visión de los hechos de Muñoz, que obviamente contrasta con la versión de los antiguos integrantes de La Voz, que lo han calificado como un operador político del gobierno.

Mientras en su momento Parada, en representación de La Voz, planteó que ellos estaban dispuestos a pagar un precio de pobre por el terreno a Nasur y “si no quiere recibir esa plata, hasta luego” y que no estaban serviles a negociar con el gobierno pues “porque han dicho que el problema es entre privados y así lo vamos a resolver” (La Tercera, 1 de noviembre de 1999, p. 9). Muñoz, por su parte, sostuvo que “nosotros decimos colaboración horizontal con el Estado. No estamos por entender a Nasur como nuestro enemigo principal” y agregó que “lo que nos diferencia de la cúpula de La Voz de Los Sin Casa es que no nos queremos convertir en una isla” (La Segunda, 9 de diciembre de 1999, p. 4).

Tras el triunfo presidencial de enero del 2000, el equipo de Ricardo Lagos pudo reconocer la envergadura del problema que involucraba el campamento. En ese momento ya se habían perfiladas dos estrategias de resolución de conflicto de parte de los pobladores de la Toma de Peñalolén.

Ese mismo mes, El Colectivo dirigido por Muñoz realizó una manifestación a las afueras de la Intendencia, con la que consiguieron una reunión donde supuestamente serían atendidos por el ministro de Vivienda. Luego, Hermosilla, en vez de presentarse, hizo llegar una carta a los dirigentes indicando que no negociaría con ellos (El Mercurio, 12 enero de 2000, p. 9C).

Esa noche hicieron un corte de calle en las afueras de la toma manifestando su disgusto (El Mercurio, 13 de enero del 2000, p. 4C). El día después los recibió un ministro por primera vez, en una reunión donde también participó el Municipio de Peñalolén: solicitaron ser reconocidos como interlocutores válidos del campamento, buscar soluciones dentro de la comuna y una mesa tripartita (El Mercurio, 14 de enero del 2000, p. 7C; El Metropolitano, 12 de enero del 2000, p. 10).

Por otra parte, el primero de febrero unas 500 personas de La Voz realizaron una manifestación contra Nasur. Gran parte de la Agrupación se congregó en Plaza Italia para bajar hacia la plaza Santa Lucía, mientras un grupo se tomaba las oficinas centrales del empresario ubicadas en Monjitas y otro entregaba una carta en la radio Romance, también de propiedad de Nasur.

En esta carta los pobladores señalaron que “advertimos que seguiremos realizando este tipo de acciones hasta que usted esté dispuesto a vendernos el terreno a un precio de pobre (0,5 UF el metro cuadrado) que ya es bastante más de lo que usted pagó por él” (La Hora, 1 de febrero de 2000, p. 8).

Las movilizaciones también intentaron llamar la atención del gobierno. El 10 de abril un centenar de pobladores de la Agrupación interrumpió una ceremonia en que participaba el nuevo ministro de Vivienda Claudio Orrego Larraín (La Tercera, 10 de abril de 2000, p. 20). Dos semanas después Orrego anunció pública-

mente que recibiría a los dirigentes del campamento (*La Tercera*, 22 de abril del 2000, p. 10).

En el contexto del primer aniversario del campamento, ambas facciones de la toma continuaron sus movilizaciones. El 27 de junio los comités agrupados en la Federación se tomaron un servicentro abandonado que estaba ubicado justo al lado del campamento. Los pobladores señalaron que querían convertir este sitio, que también era propiedad de Nasur, en un espacio comunitario. Esta acción presionó al Subsecretario del Ministerio del Interior para ordenar a Carabineros evitar este tipo de hechos (*La Segunda*, 28 de junio de 2000, p. 4).

Al cumplirse un año de la toma, La Voz hizo una dura ofensiva contra Nasur. Cerca de 400 pobladores de esta Agrupación se tomaron la bomba de bencina YPF y el servicentro de su propiedad ubicados en Juan Moya con Irarrazabal en la comuna de Ñuñoa por cerca de una hora (*La Segunda*, 5 de julio del 2000, p. 44).

Elizabeth Cerna, vocera de esa manifestación, consultada por *El Mercurio*, señaló que sus intenciones eran “presionar al empresario a ceder en su pretensión de que se le paguen 7 UF por metro cuadrado del predio” (*El Mercurio*, 6 de julio del 2000, p. 4C). Según la versión de la policía, los manifestantes portaban palos, fierros, piedras e incluso extintores, advirtiéndoles que no se moverían del lugar mientras no llegara Nasur y algunas autoridades de gobierno y comenzaron a destapar los depósitos de combustibles de lugar, lo que motivó la intervención de Fuerzas Especiales (*La Segunda*, 5 de julio del 2000, p. 44).

El saldo de la movilización fueron 31 detenidos y varios heridos. Por primera vez, una movilización de La Voz terminaba con tantos detenidos. En la conversación que tuvimos con Rodríguez, reconoció que el equipo de militantes y pobladores que planificó la movilización cometió un error: pensaron que Carabineros no atacarían una bomba de bencina llena de gente, y muy lejos de esto, la policía reprimió con dureza. En la apreciación de Rodríguez, con esa movilización:

“Se mostró que la conducción de La Surda y la conducción de La Voz de Los Sin Casa no tenía la capacidad de impulsar lo que queríamos, que era obligar a Nasur a negociar. Por lo tanto, lo que quedó en la cabeza de la gallada fue la siguiente discusión: ¿negociamos o no negociamos con el Estado?”.

Los resultados de esta fracasada acción obligaron a La Voz a replantear su estrategia. A un año de la toma de terrenos, se mostraron los signos de agotamiento de la estrategia *autonomista* de la Agrupación.

Consultado por una posible salida para este conflicto, el ministro Orrego insistió esta era “ahorrar y acercarse al Ministerio de Vivienda”, es decir la posición del gobierno no había cambiado. Para peor, las soluciones se encontraban en punto muerto. En las semanas siguientes ocurrieron una serie de incidentes que afectaron a la toma.

Según acusó Marcelo Reyes, uno de estos fue que les sembraron pertrechos militares, incluidos explosivos, en uno de los basureros de La Voz, lo que fue denunciado por los propios pobladores cuando se presentó Televisión Nacional de Chile junto con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (entrevista a Marcelo Reyes, agosto de 2022; revista *La Surda*, septiembre-octubre del 2000, p. 11).

Días después, se produjo un saqueo de la bomba de bencina abandonada de Nasur, colindante al campamento, que hace poco había ocupado la Federación, hecho ampliamente cubierto por algunos medios de comunicación (*La Segunda*, 31 de julio del 2000, p. 4).

Veinticuatro horas luego, el Juzgado de Policía Local de Peñalolén ordenó el desalojo del terreno causando amplio revuelo en el campamento (*La Nación*, 1 de agosto del 2000, p. 31). A mitad de agosto, nuevamente *La Segunda* dedicó una página completa al asunto bajo el título “Desalojo policial es la última esperanza de los vecinos de la Toma de Peñalolén” (*La Segunda*, 16 de agosto del 2000, p. 6).

Desalojos, negociación y erradicación

La posibilidad del desalojo fue uno de los desafíos más grandes en el campamento. Tanto La Voz como la Federación generaron reuniones, planes de seguridad y grupos especiales para enfrentar este posible escenario.

Según el testimonio de Germán Henríquez, tras los incidentes de la bomba de bencina, Fuerzas Especiales se presentó en tres oportunidades *a pegarle a todos los que estaban afuera de la toma y apostarse en los portones, en donde realizaba controles de identidad*. Incluso, según este dirigente, una vez Carabineros derribó los portones frente a lo que los pobladores respondieron amarrándose hombres, mujeres y niños de los brazos gritando *¡No nos moverán!* Esta actitud habría disuadido las intenciones de la policía.

Nuevamente, la proximidad de las elecciones municipales pudo relajar el ambiente. La Voz decidió participar en la primavera de ese año de los comicios para elegir alcaldes y concejales municipales. Pese a que la Surda había mantenido una posición abstencionista frente a los procesos electorales anteriores, en esta

ocasión decidieron impulsar la candidatura de Parada como concejal (revista *La Surda*, septiembre-octubre del 2000. Pp. 20-26). Parada obtuvo 790 votos por lo que no se transformó en concejal (Servicio Electoral de Chile, resultados de las elecciones municipales del 2000). Sus magros resultados desalentaron aún más a la alicaída organización.

Tras un año y medio de la formación de la toma, el modelo de participación de La Voz mostró signos de evidente cansancio. Antonieta Mariqueo, dirigente del cuadrante dos, quien lideró el primer quiebre de la Agrupación, señaló en entrevista que era necesario salir de ese espacio, porque “la Surda y los chiquillos se entramparon en no tener una salida respecto a las casas. Yo no tenía nada contra la Surda, ellos trabajaron bien, pero yo fui por una casa” (entrevista a Antonieta Mariqueo, diciembre de 2022).

A comienzos de 2001, Jaime Ravinet, ex alcalde de Santiago, asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo. Con la nueva autoridad, la posición del gobierno respecto a la toma tampoco cambió. Durante los siguientes meses, el fraccionamiento de la Agrupación comenzó una lenta intensificación.

En opinión de Guillermo Rodríguez, los operadores de la Concertación y la derecha lograron darles un golpe cuando algunos pobladores se descolgaron de La Voz, criticando a la directiva por “politizarse”. Esto provocó una crisis en la directiva de La Voz, que se quebró. Esta versión aseguró que:

“Los pobladores que defienden el proyecto de La Voz retomaron la iniciativa y lograron plebiscitar y ganar un Plan de Lucha que incorporó la retoma de la movilización y el impulso de tareas sociales urgentes. En el desarrollo de este Plan de Lucha, la crisis de la directiva se agudizó, lo que llevó a la Asamblea de Delegados de Cuadrantes a realizar una consulta democrática sobre qué dirigentes debían seguir y quiénes debían renunciar. Como resultado fueron censurados los tres dirigentes que se oponían al proyecto de La Voz. No aceptando la decisión mayoritaria, un sector quebró la organización arrastrando a un grupo de pobladores confundidos, decepcionados y agotados, a la creación de un nuevo comité” (revista *La Surda*, julio-agosto del 2001, p. 21).

A la postre, varios grupos abandonaron la Agrupación e incluso se formó un tercer referente en el interior de la toma que se llamó Coordinadora de Comités.

Además, se realizó un fuerte desprestigio del campamento cuando se vinculó falsamente a la toma con la colocación de cartas-bombas en la embajada de Estados Unidos en 2001. Si bien en este caso se terminó comprobando que los ex analistas de seguridad Humberto López Candia y Lenin Guardia -quien asesora-

raba a Miguel Nasur desde hace un tiempo- fueron quienes enviaron las bombas y nada tenía que ver la gente del campamento, las acusaciones se multiplicaron (*La Segunda*, 5 de diciembre del 2001, p. 22; *La Segunda*, 7 de diciembre del 2011, p. 4; *La Tercera*, 9 de diciembre del 2001, p. 12). A juicio de Reyes, en ese momento no lograron darse cuenta de la fuerza con que había decidido actuar el Estado.

Según una versión, en noviembre de ese año, justo un mes antes de las elecciones parlamentarias, Mario Muñoz -gracias a sus contactos en la Concertación- se reunió con el ministro del Interior José Miguel Insunza. En esta audiencia, supuestamente el gobierno se habría manifestado abierto a realizar una expropiación del terreno, anuncio que se daría a conocer en la toma misma el sábado 24 (*El Mercurio*, 4 de diciembre del 2001, p. 8C).

Esto no ocurrió, provocando la molestia de los dirigentes: iniciaron una huelga de hambre cerca de una docena de pobladores, realizaron una marcha de protesta y entregaron una carta en La Moneda e irrumpieron en la Catedral de Santiago, en donde anunciaron que el ayuno pasaría a una huelga de hambre seca (*La Tercera*, 3 de diciembre del 2011, p. 11; *La Segunda*, 3 de diciembre del 2001, p. 7; *El Mercurio*, 3 de diciembre del 2001, p. 9C; *La Tercera*, 4 de diciembre del 2001, p. 12).

Según informó *La Tercera*, a dos semanas de las elecciones, esta situación provocó descontento en los partidos oficialistas, quienes presionaron al gobierno por una solución para los pobladores de la Toma de Peñalolén (*La Tercera*, 6 de diciembre del 2001, p. 14). Habría sido el propio presidente Lagos quien habría instruido la pacificación de este conflicto (*El Mercurio*, 7 de diciembre del 2001, p. 10).

Esto comenzó a ocurrir el 6 de diciembre, cuando el ministro Secretario General de la Presidencia Álvaro García tomó el mando de parte del gobierno para enfrentar este problema y visitó la Toma de Peñalolén. Con García en terreno, se establecieron las bases para un protocolo de acuerdo liderado por Muñoz y el término de la huelga de hambre. El protocolo daría lugar a la conformación de una mesa de trabajo. (*La Tercera*, 7 de diciembre del 2011, p. 14).

Tras la firma de este acuerdo, las familias que quedaban organizadas en La Voz también lo suscribieron, aunque a esta altura su tesis política autonomista se había desvanecido, así como su exigente sistema de participación popular. La Federación en pocos días logró agrupar a la gran mayoría de los comités de la toma, e incluso en el 2002 cambió el nombre de su organización a Campamento Peñalolén, hegemonizando al conjunto de las familias.

El acuerdo firmado por el gobierno y los comités del campamento tendió, por momentos, a desvanecerse, no obstante, el trabajo se concentró en la gestión de los terrenos donde se albergarían definitivamente estas familias: sin tanto revuelo se descartó la adquisición del terreno de Nasur y con ello la posibilidad de una radicación.

Las familias del campamento obtendrían una solución en Peñalolén, y para ello se tuvo que crear un nuevo programa habitacional: la Social Dinámica Sin Deuda del Fondo Solidario para la Vivienda. Recién en marzo del 2004, con la firma de un nuevo *Protocolo de intenciones, entendimiento y buena voluntad* se presentaron las bases definitivas para la erradicación.

En este documento señaló que se otorgarían soluciones para 1.718 familias organizadas en 28 comités de vivienda, mediante el otorgamiento de subsidios habitacionales y el apoyo del Ministerio de Vivienda (MINVU, 2004). La gestión de unos terrenos ubicados al lado del sector residencial de élite conocido como Comunidad Ecológica motivó un verdadero escándalo de los ricos (Álvarez, 2008; Mardones, 2009).

En camiones militares fueron erradicadas las primeras familias del campamento en marzo del 2006, tras casi siete años de la ocupación de tierras (*La Segunda*, 21 de marzo del 2006, p. 6). Gran parte de los pobladores y pobladoras de la Toma de Peñalolén consiguió quedarse en su comuna de origen y fueron beneficiados con barrios despectivamente conocidas como *casas chubis* (Crisóstomo y Mancilla, 2007). Hacia 2016, solamente quedaban 100 familias en el terreno (Mardones, Rodríguez y Vargas, 2018). En el 2019 fueron erradicadas, por medio de un desalojo con Fuerzas Especiales, las últimas familias que quedaban en el terreno (*La Cuarta*, 5 de julio de 2019).

Conclusión: ¿Proceso aislado o referente de masas?

La Toma de Peñalolén fue uno de los puntos cúlmine del conflicto por la vivienda que se desarrolló a fines de los noventa. Aunque la mayoría de los estudios han destacado el carácter excepcional y aislado de la toma, nuestro trabajo buscó analizarla en un contexto histórico marcado por en la yuxtaposición de la crisis financiera internacional y su respectivo impacto en los sectores populares, con una hecatombe institucional en las políticas habitacionales. No queremos negar que la Toma de Peñalolén tuvo sus singularidades, sino que demostrar su carácter representativo e histórico.

Afirmamos que la Toma de Peñalolén no fue un hecho aislado, y, por el contrario, fue históricamente dada en un marco de oportunidades políticas marca-

do por la crisis económica, en que las organizaciones poblaciones respondieron utilizando sus propias capacidades, orientadas por los anteriores procesos de movilización social que habían ocurrido en estas poblaciones.

La Toma de Peñalolén se convirtió en uno de los campamentos más grandes de Chile y probablemente en el asentamiento más organizado en su momento. En términos de referencia pública, fue uno de los principales emblemas del problema de la vivienda: por eso se grabaron películas como el *Chacotero Sentimental* (1999) y teleseries como *Puertas Adentro* (2003).

Peñalolén, como comuna, ha albergado a cientos de miles de familias en sus poblaciones que han participado desde mediados del siglo XX en acciones colectivas como ocupaciones de tierras, comisiones en campamentos, ollas comunas, liturgias, protestas, entre una multitud de formas de lucha. Organizaciones como La Voz recuperaron, de forma dinámica y adaptativa, las tradiciones políticas del movimiento poblacional y ocuparon la fuerte memoria social del territorio como un elemento que les permitió orientar sus acciones, comparándolas con experiencias pasadas, como legitimar sus proposiciones. Como destacó el dirigente Marcelo Reyes, cuando se formaron las primeras ollas comunes en la toma, nadie tuvo que instruirlas: se trataba de una tradición que la gente ya conocía.

A forma de síntesis, podemos decir que el ciclo de movilización que lideró La Voz comenzó en 1997 con la organización de comités de familias sin casa, alcanzó su apogeo durante la realización misma de la toma en 1999 y, sobre todo, durante los primeros meses de la formación del campamento hasta cerca de cumplirse su primer aniversario. Durante este período, los pobladores realizaron un sinnúmero de manifestaciones públicas, recibieron solidaridad de diferentes actores, y organizaron una poderosa organización interna.

Tras el primer año, La Voz perdió la conducción del campamento como consecuencia tanto del agotamiento de su propia estrategia para la solución definitiva del problema de la vivienda de las familias, que hemos resumido como autonomista, como por la irrupción de otro grupo de dirigentes muy vinculados al oficialismo. Aunque, sin duda, hubo una dinámica de coaptación estatal, también es importante destacar que la asociación liderada por Muñoz también desarrolló una organización bastante activa y que los propios dirigentes de La Voz interpretaron, años después, como un error haber sacado del centro de su reivindicación al Estado.

En definitiva, las familias pobladoras demostraron una inmensa capacidad organizativa: se establecieron en una estructura participativa que funcionaba de abajo hacia arriba, desde los cuadrantes al directorio, como describimos, en pa-

ralelo a la formación de múltiples comisiones. Sus repertorios de lucha pasaron desde marchas, protestas y huelgas de hambre hasta la conexión ilegal y clandestina de los servicios de electricidad y alcantarillado, demostrando su potencial en la construcción social del hábitat.

La Toma de Peñalolén puso presión a las reformas habitacionales del gobierno de Lagos. Se piloteó el programa de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda en la erradicación de la toma. Aunque originalmente este movimiento buscó radicarse, estas nuevas alternativas permitieron que un importantísimo porcentaje de las familias que vivieron allí obtuvieron una solución definitiva antes del fin de la década.

Debe considerarse, también en los años noventa, el espacio poblacional como una forma histórica específica de expresión de la política popular. La resolución de asuntos públicos en el campamento se desarrolló en la cotidianidad, donde interactuaron diferentes tipos de activistas, que van desde evangélicos hasta militantes de izquierda, con el propio carácter de las familias, referentes de la cultura popular urbano. En este ámbito se produjeron las transacciones y modificaciones del curso político de la toma. El proyecto de La Voz intentó politizar en esta escala a las familias de sus cuadrantes y, en este mismo rigor, fue derrotado.

En segunda instancia, debe considerarse el rol que jugaron algunas fuerzas políticas en el desenlace de esta historia, tanto en el rol que tuvo la Surda, como posteriormente, por el lugar que ocuparon algunos sectores de la Concertación. Sin la presencia de estas fuerzas “exógenas”, el campamento no habría alcanzado tal notoriedad ni tampoco habría interactuado de la forma en que lo hizo con el Estado. Parte fundamental del éxito de todo movimiento social radica, justamente, en su capacidad de alianzas.

En tercer lugar, urge mencionar la necesaria inversión económica y emocional de las familias pobladoras que vivieron en la toma, en donde dispusieron de todas sus redes sociales, creatividad y esfuerzos. En este sentido, todas las entrevistas que realizamos destacaron el protagonismo de las mujeres en las tareas de organización colectiva y de resolución de problemas cotidianos. Una mayoría de lideresas comunitarias logró generar una estructura de participación muy disciplinada.

En cuarto lugar, y en correspondencia, en la toma maduraron prácticas políticas y estrategias de supervivencia autónomas al Estado y a los partidos políticos. En la toma hubo de *todo propio*: esto no fue producto de la búsqueda de dualizar al Estado, si no del desarrollo de una política *desde abajo*, en base a las

fuerzas propias de los pobladores. La toma logró mantener en el tiempo activa a las comunidades pobladoras, quien intentaron decidirse por sí mismas, y en este sentido, constituirse como actores y actrices colectivas.

Para los pobladores de Peñalolén no fue necesario innovar en sus repertorios de lucha ni en sus formas de organización. Lo que sí hicieron, fue una actualización del formato *tomas de terrenos*, para lo que recurrieron a la experiencia histórica de las propias familias, que permanentemente contribuyeron y “apuraron” a sus directivas.

En un contexto de crisis económica, los pobladores recurrieron a toda la carga histórica de este tipo de experiencias y usaron una tradición organizativa popular, basada en la combinación de la experiencia y sus propias familias con la capacidad organizativa del activismo poblacional de izquierda para contestar a su emergencia habitacional. Los elementos recogidos permiten sostener preliminar una relación entre crisis, oportunidades políticas y respuesta popular que debiera ser explorada en mayor profundidad.

Entrevistas

Alexis Parada, 4 de agosto de 2022.
 Antonieta Mariqueo, 13 de diciembre de 2022.
 Darinka Morales, 24 de noviembre de 2022.
 Elizabeth Cerna, 26 de agosto de 2022.
 German Henríquez, 1 de agosto de 2022.
 José Rojas, 1 de septiembre de 2022.
 Marcelo Reyes, 18 de agosto de 2022.
 María Elena Morales, 29 de agosto de 2022.
 Tania Madriaga, 10 de enero de 2023.
 Zarelli Fonseca, 18 de julio de 2023.

Prensa

El Mercurio, 1999-2001.
El Metropolitano, 1999-2000.
La Cuarta, 1999-2000.
La Hora, 1999-2000.
La Nación, 1999-2000.
La Segunda, 1999-2001.

La Tercera, 1997-2001.

Las Últimas Noticias, 1999-2000.

Referencias bibliográficas:

Álvarez, A. (2008). La segmentación socioeconómica del espacio: la comunidad ecológica y la toma de Peñalolén. *Revista EURE* (Vol. 34, n° 101), pp. 121-136.

Angelcos, N. y Pérez, M. (2017). De la “desaparición” a la reemergencia: Continuidades y rupturas del movimiento de pobladores en Chile”. *Latin American Research Review*, (n° 52-1), pp. 94-109.

Angelcos, N. y Pérez, M. (eds.) (2023). *Vivir con dignidad. Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en Chile*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Braithwaite, S. (2020). *Allegadas. Una historia de las luchas por la vivienda de las familias pobladoras sin casa en Santiago de Chile (1990-2000)*. Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Bravo, C. González, H. y Caro, S. (2022). Pobladores y pobladoras en Peñalolén (Chile) (1930-1990): espacio urbano, desigualdad y derecho a la ciudad. *Revista Notas Históricas Y Geográficas* (n° 29), pp. 141-167.

Bravo, P (2019). La crisis habitacional del invierno de 1997. Complicidad entre empresariado, CChC y autoridades en las políticas de vivienda en el Chile neoliberal. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Universidad de Chile.

Caballo, A. (2022). *La historia oculta de la década socialista (2000-2010)*. Santiago: Uqbar editores.

Castillo, M. y Forray, R. (2014). La vivienda, un problema de acceso al suelo. *ARQ* (n° 86). Pp. 48-57.

Crisóstomo, C. y Mancilla, L. (2007). Satisfacción residencial y participación en la ex toma de Peñalolén. Tesis para optar al grado de Licenciado en Trabajo Social. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

De La Maza, G. (1999). *Los movimientos sociales en la democratización de Chile*. En Drake, P. y Jaksin, I. (Comp). *El modelo chileno: democracia y desarrollo* (pp.375-405). Santiago: Lom Ediciones.

Ducci, M. (1997). Chile: el lado oscuro de una política de vivienda exitosa” *Revista EURE* (Vol. 23, n° 69), pp. 99-115.

Espinoza, V. (1993). Pobladores, participación social y ciudadanía. Entre los pasajes y las anchas alamedas. *Revista Propositiones* (n° 22), pp. 21-53.

Flores, J. (1992). *Campamento La Esperanza. Recuperando el derecho a soñar*. Santiago: Taller de Acción Cultural.

- Garcés, M. (2011). Lo que parecía invisible. En Renna, H. (Comp.), *Siete y cuatro. El retorno de los pobladores. Lucha por la vivienda, autogestión habitacional y poder popular en Santiago de Chile* (17-23). Santiago: Quimantú.
- Giannotti, E. y Braithwaite, S. (2021). Las tomas de terrenos y viviendas en Santiago de Chile, 1978-2000. *Revista Atenea* (n° 524), pp. 175-194.
- Iglesias, M. (2011). *Rompiendo el cerco: el movimiento de pobladores contra la dictadura*. Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile.
- Iglesias, M. (2023). “Crecimos en un suelo fértil”. Memoria afirmativa y acción de las pobladoras en Santiago de Chile. *Revista Izquierdas* (n° 52), pp. 1-25.
- Mardones, J. Rodríguez, D. y Vargas, M. (2018). Voces silenciadas: Efectos de las transformaciones territoriales en la comunidad, Toma de Peñalolén 1999-2016. *Revista Territorio Histórico* (n° 1), pp. 37-51.
- Mardones, R. (2009). ¡No en mi patio trasero!: el caso de la comunidad ecológica de Peñalolén. *Revista Íconos* (n° 34), pp. 139-149.
- Ministerio de Desarrollo y Planificación (2000). *Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional*. Santiago: Gobierno de Chile.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2004). *Protocolo de intenciones, entendimiento y buena voluntad*. Documento inédito, firmado el 4 de marzo del 2004.
- Moyano, C. y Castillo, S. (2023). “Ya no queremos más promesas”. Tiempo histórico, expectativas y conflicto social en la movilización de las familias allegadas en los primeros años de la transición a la democracia. *Revista Cuadernos De Historia* (n° 58), pp. 121-145.
- Muñoz, C. (2021). La toma de terrenos como recurso político y patrimonial: el caso de la toma de Peñalolén, 1999-2004. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Özler, I. (2012). The Concertación and Homelessness in Chile: Market-based Housing Policies and Limited Popular Participation. *Revista Latin American Perspectives* (Vol. 39, n° 4), pp. 53-70.
- Rodríguez, A. y Sugranyen, A. (2004). El problema de vivienda de los “con techo”. *Revista EURE* (Vol. 30, n° 91), pp. 53-65.
- Salcedo, R. (2010). The Last Slum: Moving from Illegal Settlements to Subsidized Home Ownership in Chile. *Urban Affairs Review*, (n° 46-1), pp. 90-118.
- Servicio Electoral de Chile (2000). *Resultados de las elecciones municipales del 2000*. Santiago: Gobierno de Chile.
- Zenteno, E., Sepúlveda, K., Ahumada, J., y Díaz, J. “De ciudadanías insurgentes a planificadores, urbanos. Organización social en la urbanización del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar”. *Revista de Geografía Norte Grande* 77 (2020): 166. 460
- Zenteno, E., Sepúlveda, K., Johnson, K., y Díaz, J. “Mujeres pobladoras en la reemergencia y consolidación de las tomas de terreno de Viña del Mar, Chile”, *EURE* 49(147).